



Este artículo es una publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía
Opiniones sobre este artículo escribanos a:

semanariovirtual@viva.org.co

www.viva.org.co

Construyendo agenda entre horizontes inciertos sobre industrias extractivas

Lina Macías

Licenciada en ciencias sociales

“Un poder situado por encima de toda responsabilidad humana debe estar fuera del alcance de todo ser humano”.

Charles Caleb Colton

Se celebró en Bogotá el VI Foro de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivistas (RLIE) espacio convocado por ALOP y Foro Nacional por Colombia donde convergieron países como: Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Brasil, entre otros, con el fin de compartir los análisis y debates que a nivel regional se han venido adelantando en torno a los procesos de extractivismo América Latina y en el cual Colombia se visiona como un país potencial. Como lo menciona Colton en su frase, la dinámica del extractivismo es la clara muestra de cómo el poder económico, sustentado por diferentes modelos, que van desde la industrialización primigenia y mal implementada en los inicios del siglo XX hasta el neoliberalismo a ultranza que viven actualmente nuestras regiones, ha venido pasando por encima de cualquier cuestionamiento, afectación o marco institucional que puedan tener las jóvenes democracias del Cono Sur y que parece no detenerse ante ninguna exigencia.

Este espacio logró poner a reflexionar desde lo particular de cada país actividades como: la minería, la extracción petrolera y los agro-combustibles, entre otras, en lugar de generar altas tasas de inversión social, liquidez financiera y mejoras en la calidad de vida de los grupos sociales que habitan estas zonas, ha traído afectaciones ambientales, conflictividad económica y una creciente desigualdad social. El balance que arrojan países como Bolivia, donde la economía es principalmente extractiva, sin políticas claras de diversificación económica, en México donde la privatización y desregularización bancaria permite la especulación de regalías y gasto público o el caso Brasil, donde la deforestación, la creación de grandes oleoductos de biocombustible y la exportación de alrededor de 68 millones de soja transgénica ponen de manifiesto la debilidad de la institucionalidad ante los grandes pactos comerciales que se consolidan, ya sea, como expresa Gudynas, desde los apoyos directos a la producción o bajo facilidades, exoneraciones o subvenciones en infraestructura o energía¹.

¹Gudynas, Eduardo. Agropecuaria y nuevo extractivismo bajo los gobiernos progresistas de América del Sur. Revista Territorios; Guatemala 2010

Este fenómeno pone sobre la mesa los horizontes políticos, pero sobre todo los económicos de las grandes fuerzas sociales y democráticas de los países latinoamericanos que se enuncian como progresistas, coloca en balance cuáles son las causas reales de las situaciones problemáticas que rodean la actividad extractiva y sobre cuáles intereses está apostando y priorizando el aparato estatal. Desde allí, se identificaron 4 ejes centrales donde la red y las distintas organizaciones que vienen trabajando esta temática manifestaron como ruta de reflexión y de construcción de agenda política a gestionar en cada uno de estos países, en el norte se intenta tener un impacto en las afectaciones particulares y regionales:

1. Diversificación económica o extractiva: es necesario abrir una discusión a nivel regional sobre las alternativas a la extracción minera, petrolífera, entre otras. Potenciar sectores estratégicos como la agricultura, el mercado interno y la generación de cadenas productivas con valor agregado hacen que la actividad extractiva no sea la única o más importante fuente de ingreso financiero, sino posibilitar la sostenibilidad de un modelo económico integrador.

2. Reconfigurar la matriz energética: poner a funcionar nuevos modelos energéticos, aprovechamiento de tecnologías energéticas limpias con miras a identificar cuáles mercados la consumen, entendiendo que en la lógica mundial han venido desarrollando mayor consciencia de consumo de energías limpias; esto nos permite atenuar los impactos ambientales en las regiones y no socavar minerales no renovables. Esto también genera un diálogo distinto con los habitantes de estas zonas.

3. Ordenamiento territorial: es clave realizar análisis y estudios más al detalle sobre la redistribución del patrimonio y bienes de cada región, ya que la diversificación económica está íntimamente ligada con el ordenamiento territorial de cada país. Esto relaciona el desarrollo de un proceso de descentralización, pone una fuerte discusión por el carácter de la distribución y los poderes políticos y competitivos que allí se busca enmarcar. Acá se define el cómo se distribuye, con quiénes y con qué propósitos para el beneficio de la región.

4. El papel de la institucionalidad, la consulta previa y los mecanismos de participación: siendo uno de los puntos de más discusión dentro del foro, se concluye que debido a los procesos de liberalización económica perdió su eje veedor y coordinador de las actividades de extracción centrales de cada país. En este sentido, la institucionalidad debe guiarse en dos líneas, la primera, debe generar un sistema de fiscalización de los ingresos y/o regalías que genere la actividad minera en aras de controlar los excedentes de explotación para la inversión social, superación de la pobreza e impulso del mercado interno. Y la segunda, frente a los pactos comerciales y las alianzas con monopolios mineros que en gran medida han incumplido o evadido sus responsabilidades con los territorios y sus comunidades, deben someterse a mecanismos constitucionales como: la consulta previa que en el caso de Colombia ha sido un instrumento de exigibilidad de derechos de las comunidades afectadas directa o indirectamente por actividades extractivas de diversa naturaleza. La consulta previa y otros mecanismos de participación y

debate de estos megaproyectos se encargan no sólo de evitar el desarrollo de estos procesos, sino que facilitan un pleno reconocimiento e incidencia de los actores sociales para la preservación de sus derechos, modos de vida y cultura.

Aun teniendo en cuenta que dicho mecanismo es disímil en cada país y que el sistema de coordinación total de lo institucional sobre este fenómeno extractivista pasa por tensiones entre los grupos económicos, la sociedad civil y los mercados, si es clave que el horizonte de lo institucional se forje para la protección de los derechos y no para la priorización de competencias de mercado.

Finalmente, las reflexiones que la red y que este foro realizaron son un gran insumo para la construcción de una agenda política amplia, pero esto es sólo un comienzo. Siguen quedando interrogantes sobre los límites y alcances de los mecanismos de participación e incidencia, cuáles son las responsabilidades concretas sobre minería y petróleo, qué control o veeduría puede hacer la ciudadanía al tema de las regalías y los impuestos en beneficio social y qué tan preparados estamos para implementar otros modos de consumo y de producción en la oferta de mercado actual... Mientras tanto, la discusión para construir un modelo alter-extractivista continúa.

Edición N° 00300 – Semana del 27 de Abril al 03 de Mayo de 2012